

La Secretaria General de la vostra Conselleria us ha passat un extracte de la versió en castellà d'una norma i us ha demanat que en faceu la traducció al català. Revisau la versió en català que n'heu obtingut del traductor automàtic.

Decreto-ley 5/2022, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y por el que se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza

I

El artículo 30.31 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, atribuye la materia de espectáculos y de actividades recreativas a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears como competencia exclusiva, y el artículo 31.17 de esta norma le atribuye la materia de actividades clasificadas como competencia de desarrollo legislativo y de ejecución. También establece como competencias propias de los consejos insulares las actividades clasificadas (art. 70.7) y los espectáculos públicos y las actividades recreativas (art. 70.11), cuyo ejercicio se ajustará, entre otros preceptos, a lo dispuesto en los artículos 58 y 72.

La intervención administrativa en materia de actividades recreativas y espectáculos tiene como norma nuclear la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, si bien encontramos varias normativas sectoriales que regulan algunas de estas actividades o inciden en determinados aspectos: turismo, cultura, emergencias, etc. La mayoría de estas actividades se hacen en locales y espacios especialmente habilitados y cuentan con las medidas de seguridad pertinentes. En otros casos, sin embargo, estas actividades se llevan a cabo de forma esporádica en espacios no habilitados y por eso se prevé un régimen especial para ser autorizadas con las máximas garantías de seguridad y respeto a la convivencia ciudadana.

Estas actividades no permanentes tienen una tipología variada y van desde fiestas patronales y populares, organizadas por la propia Administración, hasta acontecimientos de carácter privado y lucrativo. No obstante, por su singularidad, estas actividades no permanentes tienen unas claras limitaciones legales que hacen que se sometan a un régimen de autorización previa siempre que se acredite un interés público con criterios económicos y sociales, y se entenderá que son de carácter puntual, y solo por el tiempo imprescindible necesario a este interés público.

En los últimos tiempos han ido proliferando actividades de ocio y entretenimiento como una oferta paralela a las actividades permanentes como por ejemplo las desarrolladas en discotecas, salas de fiestas o bares de copas. Se trata de unas actividades no autorizables puesto que no acreditan ningún tipo de interés público y que plantean una competencia desleal a las actividades legales pero, sobre todo, suponen un importante riesgo para las personas que participan en ellas al no contar los lugares donde se celebran con las más mínimas medidas de seguridad. En principio, se trataría de actividades no permanentes sin autorización y perfectamente sancionables con la normativa de actividades, pero presentan un perfil particular que las diferencia de una simple actividad esporádica no autorizada.

[...]

Finalmente, una de las características más claras de estas actividades es que se realizan a menudo en edificaciones residenciales, lo cual les permite ampararse en el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio para evitar la adopción inmediata de medidas cautelares que requerirían el acceso a las dependencias donde se realizan.

II

Por otro lado, el Consejo Insular de Ibiza, con la conformidad de los cinco ayuntamientos de la isla, ha solicitado al Gobierno de las Illes Balears la aprobación de la oportuna norma reglamentaria de actualización del régimen de carga y descarga y tarifa única del sector del taxi en la isla de Ibiza establecido en la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 27 de julio de 2012, sobre el régimen de tarifas máximas obligatorias de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que se desarrollan en el territorio de la isla de Ibiza (BOIB n.º 23, de 2 de agosto de 2012).

[...]

No obstante, el Auto de la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 21 de julio de 2016 determinó la validez de las tarifas aprobadas de acuerdo con la Orden de 2013 por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Ibiza de 2 de junio de 2014 (BOIB n.º 77, de 7 de junio de 2014).

[...]

En este momento resulta muy urgente e inaplazable la inmediata aprobación de esta regulación, vista la grave situación de inseguridad jurídica existente en el marco regulador de la prestación del taxi en la isla de Ibiza. El inicio de la temporada turística conllevará un enorme aumento de la demanda de movilidad, unido a la perspectiva de recuperación de la actividad nocturna vinculada al ocio (muy asociada al uso del taxi), lo cual hace imprescindible la regulación de la prestación del servicio en el ámbito insular, que se lleva a cabo mediante la disposición adicional única de este decreto ley.

III

El decreto ley tiene habilitación expresa en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía y se dicta al amparo de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de espectáculos y de actividades recreativas y en materia de ordenación del transporte de viajeros y mercancías que tengan su origen y destino dentro del territorio de la comunidad autónoma, según los artículos 30.31 y 32.2 del Estatuto de Autonomía, respectivamente.

El artículo 49 del Estatuto de Autonomía permite al Gobierno dictar medidas legislativas provisionales, en forma de decreto ley, en casos de necesidad extraordinaria y urgente, las cuales no pueden afectar a determinadas materias. Se trata de una figura inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución española y cuyo uso ha producido una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal ha insistido en que la definición, por parte de los órganos políticos, de una situación de necesidad extraordinaria y urgente debe ser explícita y razonada, y que existirá una «conexión de sentido», o relación de adecuación, entre la situación excepcional y las medidas que se pretendan adoptar, que deben ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la Sentencia n.º 12/2015, de 5 de febrero, donde se recogen los reiterados pronunciamientos del Alto Tribunal sobre la utilización de este instrumento normativo.

Desde la Sentencia n.º 137/2011, de 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la valoración de la necesidad extraordinaria y urgente puede ser independiente de su imprevisibilidad e incluso puede tener origen en la inactividad previa de la administración competente, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la misma línea que la anterior Sentencia n.º 29/1986, de 20 de febrero, en la Sentencia n.º 237/2012, de 13 de diciembre, razona que no debe confundirse la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea y, por lo tanto, deberá permitirse que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan un posterior desarrollo normativo y de actuaciones administrativas de ejecución de aquellas.

Las medidas que se adoptan en este decreto ley tienen por finalidad garantizar la seguridad y la salud de las personas y sus bienes, además de garantizar el cumplimiento de la normativa exigible en el ámbito de las actividades recreativas y de espectáculos públicos, como por ejemplo la protección de los menores, la minimización de las molestias a los ciudadanos o los frecuentes problemas de movilidad y alteración de la seguridad vial que a menudo conllevan estas actividades clandestinas, y, por otro lado, acabar con la grave situación de inseguridad jurídica existente en el marco regulador de la prestación del taxi en la isla de Ibiza, lo que determina la urgencia de las medidas que deben adoptarse, que exigen un plazo más breve que el que requiere la tramitación parlamentaria de las leyes, así como la de los reglamentos, tanto por el procedimiento ordinario como por el de urgencia, y, en consecuencia, justifica la utilización del instrumento del decreto ley previsto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Este decreto ley cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ser utilizado, puesto que las medidas que se adoptan introducen una serie de modificaciones legales y reglamentarias que permitirán hacer frente a este importante problema de forma rápida y efectiva.

IV

De este modo, este decreto ley se estructura en un artículo, una disposición adicional, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.

Mediante el artículo único se modifican varios artículos de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, para hacer frente a la proliferación de las fiestas ilegales, sobre

todo aquellas que se llevan a cabo en viviendas y en determinados ámbitos de suelo rústico. Estos tipos de actos, al margen de la competencia desleal que suponen para las actividades de entretenimiento y ocio legalmente establecidas, no solo suponen un importante riesgo para las personas que participan en ellas al no tener los lugares donde se llevan a cabo los elementos de seguridad y protección requeridos, sino que también tienen importantes impactos en el orden público y en la convivencia ciudadana, generando molestias y ruidos, problemas de movilidad y de acceso de servicios esenciales, además de ser un potencial foco de otras actividades ilícitas.

Con esta modificación de la Ley se hace una definición esmerada de estas fiestas, diferenciándolas de las que tienen un carácter familiar o privado y del resto de actividades no permanentes que, a pesar de que puedan presentar similitudes con estas fiestas, no tienen este carácter de acontecimientos organizados como oferta paralela a la oferta legal de ocio y entretenimiento. Asimismo, se establece un régimen sancionador riguroso que alcanza tanto a los organizadores y a las personas que se lucran con estas actividades como a los participantes que, con su actitud incívica, ponen en riesgo la salud de las personas o el medio ambiente.

La disposición adicional única establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza que afecta al ámbito de aplicación de las tarifas, siendo aplicables al servicio de taxi tanto de carácter urbano como interurbano, ordinario o estacional; se adecuan a la situación actual las condiciones del régimen de recogida de viajeros, eliminando la preferencia en las paradas de los taxis municipales e incorporando el régimen de posicionamiento por satélite (GPS); se incluye el suplemento de gestión de servicio de posicionamiento por satélite dentro del suplemento por radioteléfono; se prevé que las tarifas correspondientes al servicio por distancia recorrida únicamente se aplicarán cuando los vehículos no superen la velocidad máxima permitida; en relación con la incorporación al taxímetro de la tarifa por kilómetros realmente recorridos se suprime que se complete el precio final con el importe del retorno al lugar de origen del servicio, y se establece que los usuarios tienen derecho al transporte gratuito del equipaje.

Mediante la disposición derogatoria se derogan todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a este decreto ley, lo contradigan o sean incompatibles con lo que dispone y, en particular, la Orden del consejero de Agricultura, Medio ambiente y Territorio de 27 de julio de 2012, sobre el régimen de tarifas máximas obligatorias de los servicios interurbanos de transporte

público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que se desarrollan en el territorio de la isla de Ibiza, y el punto 7 del artículo 95 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears.

Mediante la disposición final primera de este decreto ley se modifica la disposición adicional primera del Decreto Ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medias extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania, con la finalidad de extender a la Universidad de las Illes Balears y sus entidades instrumentales las previsiones normativas en materia de contratación que, respecto de los consejos insulares, los entes locales y sus entidades instrumentales, contiene el primer párrafo de la citada disposición adicional.

[...]

Mediante la disposición final tercera de este decreto ley se modifica puntualmente la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, porque, a la vista de la problemática generada en el aeropuerto por la captación ilegal de viajeros in situ en la terminal por parte de empresas VD (minibús), incumpliendo la obligación de precontratación establecida en el artículo 63.4 de la Ley 4/2014, y a la vista de que supone competencia desleal dentro del sector del transporte de viajeros, se considera necesario que en la presente temporada turística se pueda sancionar también el simple ofrecimiento de servicios de transporte a los viajeros por parte de empresas transportistas (y no solo la prestación de servicios de transporte incumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 63.4, como hasta ahora), facilitando así la inspección y sanción de esta conducta ilegal de captación. Además, también se ha considerado adecuado subir un grado la calificación de esta conducta infractora (la captación de viajeros fuera de los locales y oficinas de la empresa transportista), quedando calificada a partir de ahora como infracción muy grave, para conseguir así disuadir a las empresas de realizar esta conducta infractora.

Mediante la disposición final cuarta de este decreto ley, se procede a la modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, por los siguientes motivos: otorgar una nueva redacción a los puntos 1 y 4 del artículo 23, con el fin de adecuar su regulación al contenido del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como introducir una referencia al incumplimiento del régimen de autorización, todo ello en la línea de una adecuada seguridad jurídica; incluir una nueva letra, la m), en el

artículo 120, relativa a incumplimientos de determinadas obligaciones derivadas de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio; modificar el punto 1 del artículo 128, para hacer referencia a las medidas provisionales previstas por la Ley 39/2015, por seguridad jurídica, y añadir un nuevo artículo, el 128 bis, con el fin de introducir la posibilidad de aplicar multas coercitivas en el ámbito de la normativa turística, a efectos de poder garantizar con la eficacia adecuada el cumplimiento de la misma.

Asimismo, por medio de la disposición final quinta, se modifica puntualmente el artículo 7 de la Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022, a fin de introducir un nuevo apartado 4 en el citado artículo por el que se prevea expresamente la posibilidad de incorporar o generar crédito en el estado de gastos del ejercicio 2022, según corresponda, por razón de los ingresos derivados de los reintegros de fondos percibidos por los beneficiarios de las ayudas establecidas en el Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

[...]

Completan este decreto ley la disposición final séptima, mediante la que se faculta al Consejo de Gobierno para que, mediante un decreto, pueda modificar las normas que contiene la disposición adicional única, y la disposición final octava, mediante la que se establece la entrada en vigor del decreto ley el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».

[...]

Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad; de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores; del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y del consejero de Movilidad y Vivienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión del día 16 de mayo de 2022, se aprueba el siguiente Decreto ley:

[...]

Decret-Llei 5/2022, de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació del servei de taxi en l'àmbit territorial de la illa d'Eivissa

I

L'article 30.31 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix la matèria d'espectacles i d'activitats recreatives a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a competència exclusiva, i l'article 31.17 d'aquesta norma li atribueix la matèria d'activitats classificades com a competència de desenvolupament legislatiu i d'execució. També estableix com a competències pròpies dels consells insulars les activitats classificades (art. 70.7) i els espectacles públics i les activitats recreatives (art. 70.11), l'exercici del qual s'ajustarà, entre altres preceptes, al que es disposa en els articles 58 i 72.

La intervenció administrativa en matèria d'activitats recreatives i espectacles té com a norma nuclear la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears, si bé trobam diverses normatives sectorials que regulen algunes d'aquestes activitats o incideixen en determinats aspectes: turisme, cultura, emergències, etc. La majoria d'aquestes activitats es fan en locals i espais especialment habilitats i compten amb les

mesures de seguretat pertinents. En altres casos, no obstant això, aquestes activitats es duen a terme de forma esporàdica en espais no habilitats i per això es preveu un règim especial per ser autoritzades amb les màximes garanties de seguretat i respecte a la convivència ciutadana.

Aquestes activitats no permanents tenen una tipologia variada i van des de festes patronals i populars, organitzades per la pròpia Administració, fins a esdeveniments de caràcter privat i lucratiu. No obstant², per la seva singularitat, aquestes activitats no permanents tenen unes clares limitacions legals que fan que se sotmetin a un règim d'autorització prèvia sempre que s'acrediti un interès públic amb criteris econòmics i socials, i s'entendrà que són de caràcter puntual, i només pel temps imprescindible necessari a aquest interès públic.

En els últims temps han anat proliferant activitats d'oci i entreteniment com una oferta paral·lela a les activitats permanents com per exemple les desenvolupades en discoteques, sales de festes o bars de copes. Es tracta d'unes activitats no autoritzables lloc que no acrediten cap tipus d'interès públic i que plantegen una competència deslleial a les activitats legals però, sobretot, suposen un important risc per a les persones que participen en elles al no explicar els llocs on se celebren amb les més mínimes mesures de seguretat. En principi, es tractaria d'activitats no permanents sense autorització i perfectament sancionables amb la normativa d'activitats, però presenten un perfil particular que les diferencia d'una simple activitat esporàdica no autoritzada.

[...]

Finalment, una de les característiques més clares d'aquestes activitats és que es realitzen sovint en edificacions residencials, la qual cosa els permet emparar-se en el dret fonamental de la inviolabilitat del domicili per evitar l'adopció immediata de mesures cautelars que requeririen l'accés a les dependències on es realitzen.

II

D'altra banda, el Consell Insular d'Eivissa, amb la conformitat dels cinc ajuntaments de la illa, ha sol·licitat al Govern de les Illes Balears l'aprovació de l'oportuna norma reglamentària d'actualització del règim de càrrega i descàrrega i tarifa única del sector del taxi en l'illa d'Eivissa establert en l'Ordre del conseller de Agricultura, Medi ambient i Territori de 27 de juliol de 2012, sobre el règim de tarifes màximes obligatòries dels serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme que es desenvolupen en el territori de la illa d'Eivissa (BOIB n.º 23, de 2 d'agost de 2012).

[...]

No obstant², la Interlocutòria de la mateixa Sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 21 de juliol de 2016 va determinar la validesa de les tarifes aprovades d'acord amb l'Ordre de 2013 per acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa de 2 de juny de 2014 (BOIB n.º 77, de 7 de juny de 2014).

[...]

En aquest moment resulta molt urgent i inajornable la immediata aprovació d'aquesta regulació, vista la greu situació d'inseguretat jurídica existent en el marc regulador de la prestació del taxi en l'illa d'Eivissa. L'inici de la temporada turística comportarà un enorme augment de la demanda de mobilitat, unit a la perspectiva de recuperació de l'activitat nocturna vinculada a l'oci (molt associada a l'ús del taxi), la qual cosa fa imprescindible la regulació de la prestació del servei en l'àmbit insular, que es du a terme mitjançant la disposició addicional única d'est decret llei.

III

El decret llei té habilitació expressa en l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia i es dicta a l'empara de les competències que exerceix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'espectacles i d'activitats recreatives i en matèria d'ordenació del transport de viatgers i mercaderies que tinguin el seu origen i destinació dins del territori de la comunitat autònoma, segons els articles 30.31 i 32.2 de l'Estatut d'Autonomia, respectivament.

L'article 49 de l'Estatut d'Autonomia permet al Govern dictar mesures legislatives provisionals, en forma de decret llei, en casos de necessitat extraordinària i urgent, les quals no poden afectar a determinades matèries. Es tracta d'una figura inspirada en la qual preveu l'article 86 de la Constitució espanyola i l'ús de la qual ha produït una extensa jurisprudència del Tribunal Constitucional. L'Alt Tribunal ha insistit que la definició, per part dels òrgans polítics, d'una situació de

necessitat extraordinària i urgent ha de ser explícita i raonada, i que existirà una «connexió de sentit», o relació d'adequació, entre la situació excepcional i les mesures que es pretenguin adoptar, que han de ser idònies, concretes i d'eficàcia immediata. És exponent d'aquesta doctrina constitucional la Sentència n.º 12/2015, de 5 de febrer, on es recullen els reiterats pronunciaments de l'Alt Tribunal sobre la utilització d'aquest instrument normatiu.

Des de la Sentència n.º 137/2011, de 14 de setembre, el Tribunal Constitucional ha reconegut que la valoració de la necessitat extraordinària i urgent pot ser independent de la seva imprevisibilitat i fins i tot pot tenir origen en la inactivitat prèvia de l'administració competent, sempre que concorri efectivament l'excepcionalitat de la situació. Així mateix, el Tribunal Constitucional, en la mateixa línia que l'anterior Sentència n.º 29/1986, de 20 de febrer, en la Sentència n.º 237/2012, de 13 de desembre, raona que no ha de confondre's l'eficàcia immediata de la norma provisional amb la seva execució instantània i, per tant, haurà de permetre's que les mesures adoptades amb caràcter d'urgència incloguin un posterior desenvolupament normatiu i d'actuacions administratives d'execució d'aquelles.

Les mesures que s'adopten en est decret llei tenen per finalitat garantir la seguretat i la salut de les persones i els seus béns, a més de garantir el compliment de la normativa exigible en l'àmbit de les activitats recreatives i d'espectacles públics, com per exemple la protecció dels menors, la minimització de les molèsties als ciutadans o els freqüents problemes de mobilitat i alteració de

la seguretat vial que sovint comporten aquestes activitats clandestines, i, d'altra banda, acabar amb la greu situació d'inseguretat jurídica existent en el marc regulador de la prestació del taxi en l'illa d'Eivissa, la qual cosa determina la urgència de les mesures que han d'adoptar-se, que exigeixen un termini més breu que el que requereix la tramitació parlamentària de les lleis, així com la dels reglaments, tant pel procediment ordinari com pel de urgència, i, en conseqüència, justifica la utilització de l'instrument del decret llei previst en l'article 49 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Est decret llei compleix els requisits exigits per la jurisprudència constitucional per ser utilitzat, ja que les mesures que s'adopten introdueixen una sèrie de modificacions legals i reglamentàries que permetran fer front a aquest important problema de forma ràpida i efectiva.

IV

D'aquesta manera, est decret llei s'estructura en un article, una disposició addicional, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals.

Mitjançant l'article únic es modifiquen diversos articles de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears, per fer front a la proliferació de les festes il·legals, sobretot aquelles que es duen a terme en habitatges i en determinats àmbits de sòl rústic. Aquests tipus d'actes, al marge de la competència deslleial que suposen per a les activitats

d'entreteniment i oci legalment establertes, no només suposen un important risc per a les persones que participen en elles al no tenir els llocs on es duen a terme els elements de seguretat i protecció requerits, sinó que també tenen importants impactes en l'ordre públic i en la convivència ciutadana, generant molèsties i sorolls, problemes de mobilitat i d'accés de serveis essencials, a més de ser un potencial focus d'altres activitats il·lícites.

Amb aquesta modificació de la Llei es fa una definició acurada d'aquestes festes, diferenciant-les de les quals tenen un caràcter familiar o privat i de la resta d'activitats no permanents que, a pesar que puguin presentar similituds amb aquestes festes, no tenen aquest caràcter d'esdeveniments organitzats com a oferta paral·lela a l'oferta legal d'oci i entreteniment. Així mateix, s'estableix un règim sancionador rigorós que aconsegueix tant als organitzadors i a les persones que es lucren amb aquestes activitats com als participants que, amb la seva actitud incívica, posen en risc la salut de les persones o el medi ambient.

La disposició addicional única estableix el règim de prestació del servei de taxi en l'àmbit territorial de la illa d'Eivissa que afecta a l'àmbit d'aplicació de les tarifes, sent aplicables al servei de taxi tant de caràcter urbà com a interurbà, ordinari o estacional; s'adequan a la situació actual les condicions del règim de recollida de viatgers, eliminant la preferència en les parades dels taxis municipals i incorporant el règim de posicionament per satèl·lit (GPS); s'inclou el suplement de gestió de servei de posicionament per satèl·lit dins del suplement per radiotelèfon; es preveu que les tarifes corresponents al servei per distància

recorreguda únicament s'aplicaran quan els vehicles no superin la velocitat màxima permesa; en relació amb la incorporació al taxímetro de la tarifa per quilòmetres realment recorreguts se suprimeix que es completi el preu final amb l'import de la tornada al lloc d'origen del servei, i s'estableix que els usuaris tenen dret al transport gratuït de l'equipatge.

Mitjançant la disposició derogatòria es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a est decret llei, ho contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa i, en particular, l'Ordre del conseller de Agricultura, Medi ambient i Territori de 27 de juliol de 2012, sobre el règim de tarifes màximes obligatòries dels serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme que es desenvolupen en el territori de la illa d'Eivissa, i el punt 7 de l'article 95 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

Mitjançant la disposició final primera d'est decret llei es modifica la disposició addicional primera del Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mitjanes extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, amb la finalitat d'estendre a la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats instrumentals les previsions normatives en matèria de contractació que, respecte dels consells insulars, els ens locals i les seves entitats instrumentals, conté el primer paràgraf de la citada disposició addicional.

[...]

Mitjançant la disposició final tercera d'est decret llei es modifica puntualment la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, perquè, a la vista de la problemàtica generada en l'aeroport per la captació il·legal de viatgers in situ en la terminal per part d'empreses VD (minibús), incomplint l'obligació de precontratación establerta en l'article 63.4 de la Llei 4/2014, i a la vista que suposa competència deslleial dins del sector del transport de viatgers, es considera necessari que en la present temporada turística es pugui sancionar també el simple oferiment de serveis de transport als viatgers per part d'empreses transportistes (i no només la prestació de serveis de transport incomplint les condicions establertes en l'article 63.4, com fins ara), facilitant així la inspecció i sanció d'aquesta conducta il·legal de captació. A més, també s'ha considerat adequat pujar un grau la qualificació d'aquesta conducta infractora (la captació de viatgers fora dels locals i oficines de l'empresa transportista), quedant qualificada a partir d'ara com a infracció molt greu, per aconseguir així dissuadir a les empreses de realitzar aquesta conducta infractora.

Mitjançant la disposició final quarta d'est decret llei, es procedeix a la modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, pels següents motius: atorgar una nova redacció als punts 1 i 4 de l'article 23, amb la finalitat d'adequar la seva regulació al contingut de l'article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com introduir una referència a l'incompliment del règim d'autorització, tot això en la línia d'una adequada

seguretat jurídica; incloure una nova lletra, la m), en l'article 120, relativa a incompliments de determinades obligacions derivades de la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny; modificar el punt 1 de l'article 128, per fer referència a les mesures provisionals previstes per la Llei 39/2015, per seguretat jurídica, i afegir un nou article, el 128 bis, amb la finalitat d'introduir la possibilitat d'aplicar multes coercitives en l'àmbit de la normativa turística, a l'efecte de poder garantir amb l'eficàcia adequada el compliment de la mateixa.

Així mateix, per mitjà de la disposició final cinquena, es modifica puntualment l'article 7 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, a fi d'introduir un nou apartat 4 en el citat article pel qual es prevegi expressament la possibilitat d'incorporar o generar crèdit en l'estat de despeses de l'exercici 2022, segons correspongui, per raó dels ingressos derivats dels reintegraments de fons percebuts pels beneficiaris de les ajudes establertes en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

[...]

Completen est decret llei la disposició final setena, mitjançant la qual es faculta al Consell de Govern perquè, mitjançant un decret, pugui modificar les normes que conté la disposició addicional única, i la disposició final vuitena, mitjançant la qual

s'estableix l'entrada en vigor del decret llei l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

[...]

Per tot això, a l'empara de l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat; de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors; del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i del conseller de Mobilitat i Habitatge, i prèvia deliberació del Consell de Govern en la sessió del dia 16 de maig de 2022, s'aprova el següent Decret llei:

[...]